



Título del Trabajo:

CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN EL EJE ANDINO: DIFERENTES
CRISTALIZACIONES EN LOS ESPACIOS NACIONALES

Autor:

Teresita Morel

Marcela Brizzio

Alejandra Giupponi

Ponencia presentada en el

II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

11 y 12 de noviembre de 2004

A partir de mediados de la década del ochenta se instauraron en la región andina políticas neoliberales de ajuste estructural, apertura de los mercados nacionales, reducción del estado, privatizaciones y pulverización de las políticas sociales. Estas medidas, por lo general, fueron acompañadas de ineficiencia y corrupción, aplicando sin discriminar, esquemas de conducción económica en sociedades heterogéneas, inestables y con una participación democrática limitadamente formal. (Ramirez: 2000; 17)

Es así como en Bolivia la hiperinflación de 1985 que había derrocado al gobierno de la Unión Democrática y Popular, dio lugar al programa de ajuste estructural y el decreto 21060 que resumía el ocaso de una economía hasta entonces mayoritariamente estatal y basada en las empresas públicas, implantando la ortodoxia neoliberal. El principal efecto de esta disposición fue detener la inflación y desde entonces la paridad del cambio del peso boliviano con el dólar fue subiendo muy lentamente. (Urioste: 2004; 155)

En Ecuador en cambio, aunque es a partir del mismo año (1985) que se comienza a conducir al país por la vía neoliberal, el ajuste no se efectuó en esa década y la inflación superó el 60% en 1999. Ante el caos financiero y la presión del pago de la deuda, recién en 1999 el gobierno de Jamil Mahuad decretó feriado bancario y paralelamente el congelamiento parcial de los depósitos, salvando a los banqueros y provocando recesión, paralización de la inversión, cierre de empresas y desempleo, y, unos meses después, intentó implementar una dolarización que, a pesar de la trascendente movilización política que ocasionó, fue impuesta igualmente por su sucesor. Por el contrario, los sectores financieros y empresariales de derecha la vieron con buenos ojos ya que les posibilitaba destrabar las privatizaciones y la flexibilidad laboral, asegurando al mismo tiempo el equilibrio fiscal. (Ramirez: 2000; 18)

La implementación del modelo neoliberal en Perú debería esperar hasta el gobierno de Alberto Fujimori.¹ Luego de una década de crisis económica y terrorismo, el Perú ingresó a la globalización en 1990. Este gobernante efectuó una estratégica alianza con sectores empresariales y con las Fuerzas Armadas para iniciar un período de saneamiento económico y control de la seguridad interna. El ajuste estructural aplicado ese año, redujo el poder adquisitivo al 60% de su valor anterior. A fin de conseguir la "reinserción en la economía mundial" el gobierno tomó medidas tales como la baja de los aranceles a favor de la producción foránea, clausura de los bancos estatales de promoción, anulación del sistema de subsidios, inicio de un plan de privatizaciones, entrega de fondos de pensiones a empresas privadas,

¹ En la década del ochenta se había iniciado el proceso de redemocratización en ese país, al unísono con el resto de América Latina, ganando las elecciones el APRA con Alan García como su máximo dirigente. La grave crisis económica y social existente no pudo ser resuelta ni morigerada por los gobiernos elegidos. El fracaso económico aprista generó las condiciones para que se desarrollara en el país la "peor crisis del siglo" lo que provocó un cambio social (especialmente de los jóvenes) orientado particularmente hacia el mercado, el narcotráfico y el terrorismo. Así la base que poseía el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1980 fue rebasada cuantiosamente en esos años.

tributación privilegiada y el uso de fondos públicos para rescatar deudas empresariales con los bancos.

Al volver al modelo primario exportador, en el que la apropiación de los recursos naturales y del proceso de generación y uso del excedente económico resultaría a favor de las empresas transnacionales, los esfuerzos no se orientaron a incrementar la productividad, eficiencia y competencia sino que cayeron en condiciones de producción monopólicas y oligopólicas, transfiriendo activos del estado al ámbito privado. (Barrera Guardera: 2000; 12)

Las políticas de privatización, además de un rápido y fácil expediente para resolver el déficit fiscal frente a los grupos de poder económicos, han sido una apuesta por el modelo de libre mercado, es decir, una economía donde reine el capital privado y donde el estado no le haga sombra. Para ello, era necesario un nuevo marco jurídico.

Es así como el primer gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997) en Bolivia concedió la propiedad de los recursos hidrocarbúricos a favor de las empresas extranjeras, contradiciendo totalmente lo normado en la Constitución boliviana, que expresaba que "los yacimientos de hidrocarburos son de dominio directo, inalienable, e imprescriptible del estado". El indiscriminado proceso de privatización de las principales actividades que arrojaban rentabilidad y que tenían una buena perspectiva en el futuro, como los recursos naturales no renovables (hidrocarburos) y servicios (telecomunicaciones, energía eléctrica, transporte ferroviario y aéreo) quedaron bajo la responsabilidad de diez empresas extranjeras. También las actividades referentes a la minería, la agricultura, el comercio, la banca y la industria pasaron a manos de empresas transnacionales. (Villegas Quiroga, 2003: 28)

En Ecuador es justamente a partir del gobierno de Febres Cordero (1984-1988) partidario de la apertura a las inversiones extranjeras, que se modificó la política de desarrollo autónomo concretada en la creación de una empresa pública llamada "Petroecuador. Esta entidad controlaba la producción de hidrocarburos que son la principal fuente de ingresos del país. A partir de 1986, las compañías extranjeras obtuvieron una gran extensión en la cuenca amazónica, explotando el crudo pesado y acaparando el 80% de su producción. Bajo su presión, se está construyendo un nuevo oleoducto² muy controvertido por motivos ecológicos y poblacionales que quedará en manos de las compañías por espacio de veinte años. (Barthélemy: 2002; 2)

Todos los recursos naturales peruanos que interesan al capital internacional ya han sido puestos bajo su control. El fujimorismo vendió y remató las empresas de electricidad, telefonía, refinerías de petróleo, gas, kerosén, estatizadas durante el velasquismo; para llevar adelante esta política, se mostró decidido desde el comienzo a neutralizar la independencia del Poder

² El Estado ya había construido uno: el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE)

Judicial para lograr sus objetivos y metas políticas. Se llevó a cabo una destitución masiva e irregular de jueces y fiscales en todo el país, comenzando por la propia Corte Suprema. Sus sustitutos fueron nombrados por el Poder Ejecutivo en forma irregular. Puso también bajo su control al Poder Legislativo mediante favores y sobornos; utilizando a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia para reprimir cualquier movimiento opositor a su política.

Para atraer inversiones foráneas se precarizaron las relaciones laborales: fueron ampliadas las causales de despido, se prolongaron los horarios de trabajo sin ningún beneficio laboral, en Perú se prohibió la negociación de federaciones sindicales con uniones patronales; en Bolivia no se llevó a cabo esa prohibición pero en todos los casos el derecho de huelga quedó limitado por temor al despido. El modelo así se sostuvo desde el lado más débil de la relación: reducir los costos laborales de los trabajadores sobre países de pobreza estructural. Bolivia, Ecuador y Perú cuentan con una mayoritaria población campesina que conforma un bolsón de pobreza que supera el 50% en cada uno de ellos. Bolivia es uno de los países con más pobreza y miseria de Sudamérica, el 20% más pobre de la población, en su mayoría indígena recibe el 4% del producto nacional contra el 55% que acumula el sector más rico. Más del 20 % de su gente está desnutrida y la tasa de desempleo bordea el 14 % de la población económicamente activa. (Diario Clarín: 2003; 20) No hay trabajo, no solamente para los campesinos-indígenas o ex obreros que deambulan por las calles en búsqueda de cualquier fuente de ingreso, sino inclusive para amplios sectores de las clases medias profesionales que sufren como nunca una disminución absoluta en sus niveles de ingreso y bienestar económico. (Urioste: 2004; 159)

Según estadísticas del año 2002, Perú cuenta con más de 26 millones de habitantes. Uno de cada dos peruanos vive en situación de pobreza y uno de cada cinco, alrededor de 5 millones de personas, vive en pobreza extrema. En el estudio "Pobreza, crecimiento y desigualdad: Perú 1991-1994", publicado dentro del documento "Cómo estamos", de la organización Cuánto S.A., se muestra que el 20% más rico de la sociedad peruana consume casi el 50% del gasto nacional, mientras que el 20% más pobre llega apenas al 6% del gasto total. El subempleo mantiene su conocida situación crítica: sólo 30% de la PEA está adecuadamente empleada. Los indígenas de la Amazonía presentan los mayores niveles de pobreza en el país, que alcanza el 59.48% de la población en la selva rural.

El acaparamiento de la riqueza en pocas manos es una causa de la pobreza en el Ecuador. Los grupos monopólicos y su concentración del capital nacional han provocado una crisis en la gran mayoría de la población. En 1.996, seis grupos monopólicos controlaban el 62% de las divisas de exportación El Producto Interno Bruto per-capita va decreciendo, mientras que en 1.996 fue de \$1.565, en 1.998 fue de \$1.518. El 70% de los 4.800.000 niños viven en situación de extrema pobreza y la mitad de los

pobres son menores de 18 años. La pobreza y exclusión en el Ecuador explican la mitad de las muertes de los niños menores de 5 años. Uno de cada 5 niños sufre desnutrición. ("Comparte" en Ecuador: 2004)

La apertura comercial significó un duro golpe para el sector campesino en estos países. A pesar de las permanentes demandas no hubo políticas dirigidas a los pequeños productores para mejorar la productividad y la competitividad de al menos los productos de mayor potencialidad. La importación de productos para consumo, insumos y alimentos desplazó del mercado interno a los productos nacionales, particularmente a los productos agrícolas y alimentos tradicionalmente producidos por las poblaciones indígenas y campesinas del mundo rural, generando desempleo y pobreza y terminando con las posibilidades de desarrollo en el ámbito agropecuario rural. Muchos campesinos indígenas se vieron expulsados de sus comunidades de origen hacia las ciudades para comenzar el duro peregrinaje que implica conseguir el trabajo en condiciones de explotación sin ningún tipo de garantías laborales. Se originó asimismo una desintegración de las comunidades indígenas. En Ecuador, al compás de las transformaciones señaladas, fueron entrando en un proceso de "privatización", en el sentido de que cada vez más hay comuneros individuales, sin relación con la tierra que buscan participar del mercado capitalista, lo que significa un reprocesamiento de las relaciones entre la comunidad, la familia y el individuo, esto en un marco "que cada vez se asemeja más al paisaje de villas miserias y menos al romántico entorno de lo campesino".(Centro Andino de Acción Popular: 2000; 22)

Debido al deterioro de las condiciones de vida del campesinado del Altiplano boliviano, El Alto y Santa Cruz se convirtieron en el principal destino de la población migrante del país. Pero el rápido crecimiento demográfico del Alto ha sido acompañado de una extrema precariedad en las condiciones de vivienda y cobertura de servicios básicos, de servicios hospitalarios y de número y calidad de los establecimientos educativos. El 60% de los hogares permanece por debajo de la línea de pobreza y la mitad de estos se encuentran en la indigencia. (Escobar de Pabón, Silvia: 2003; 53)

La extrema pobreza se ha concentrado dramáticamente en las áreas rurales pero especialmente en aquellas más alejadas y distantes de las ciudades intermedias y de los centros urbanos. Debido a ello, la población ha desarrollado estrategias de supervivencia que combinan múltiples iniciativas para generar empleo temporal y completar los ingresos familiares mediante el comercio, la producción artesanal y especialmente la venta de su fuerza de trabajo fuera de su lugar de origen.

La reforma agraria profunda que se llevó a cabo a finales de la década del sesenta en Perú tuvo éxito en su objetivo redistributivo, pero fracasó en el intento de crear cooperativas de pequeños productores que funcionasen como unidades de producción eficientes, por lo cual el sector reformado se disgregaría paulatinamente a lo largo de la década del 1980, hasta llegar a

no ser más que una enorme masa de parceleros con propiedades de menos de 5 has cada uno. Estas pequeñas propiedades generaron una masa campesina pobre y ha obligado a buena parte de la población joven a migrar a las ciudades en búsqueda de trabajo. También ha reorientado la producción comunitaria hacia el mercado.

La consecuencia de la aplicación de estas recetas ha generado un amplio descreimiento y una baja de los niveles de confianza tanto en los partidos políticos como en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de estos países, manifestándose una insatisfacción profunda frente a toda la institucionalidad.

La asociación con la corrupción y el autoritarismo ha sido muy profunda en Perú, donde Fujimori se perpetuó diez años en el poder. En su caída jugaron un importante papel una serie de videos que demostraron la más alta corrupción y negociado durante la década, al punto de que el ex presidente tuvo que irse del país y pedir asilo en Japón. En uno de los videos más resonantes se mostraba a Vladimiro Montesinos "comprando" por 15 mil dólares a Alberto Kouri, un congresista de la oposición para que se pasara a las filas del gobierno. Asimismo el presidente del directorio de Panamericana televisión, Ernesto Schutz, recibía la cantidad de once millones de dólares a cambio de su silencio cómplice y el apoyo de su red televisiva -una de las más grandes del país- a los objetivos del gobierno fujimorista.

Un cabal ejemplo de enriquecimiento ilícito fue el de Sanchez de Losada, ex presidente de Bolivia, quién amasó una fortuna superior a los 250 millones de dólares a expensas de la entrega obsequiosa de los recursos de la nación. (Guerra Cabrera, 2003; 11) A partir de la recuperación democrática los partidos políticos se habían mezclado en casos de corrupción y prebendas desvirtuando la función pública. Las empresas públicas fueron privatizadas a precio de remate mediante escandalosos negocios, fraudes y disposiciones inconstitucionales urdidos entre los viejos y nuevos oligarcas y las compañías transnacionales.

Ramirez Gallegos explica que las causas de la catastrófica economía ecuatoriana y el desastre social que acarreó no provino de fuerzas económicas impersonales, sino de la captura del Estado por intereses privados y corporativos que lo aniquilaron como espacio de representación pública. Ejemplo de esto fue el crédito del gobierno a los bancos, el "salvataje bancario" ilegal realizado por Jamil Mahuad, presidente ya mencionado, en total relación con el hecho de que habían sido banqueros los que financiaron su campaña electoral. Este autor categoriza como "acuerdo oligárquico/mafioso" esta vinculación estrecha entre las élites políticas, el Estado y el capital financiero. (Ramirez: 2000; 19) Asimismo, Barrera Guardera marca como los oligopolios se apoyan en el Estado, a pesar del

discurso liberal, pujando por controlarlo, ya que el "libre mercado" es solo discursivo³

Una institución con tradicional peso en América Latina son las Fuerzas Armadas. Su comportamiento, aunque generalmente autoritario, tuvo y tiene en este marco de políticas neoliberales, particularidades específicas en cada uno de los países estudiados.

En Perú, las fuerzas armadas han ido mutando a lo largo de los años. Si para la década del 60-70 tuvieron un papel político singular, como centro de la modernización desde arriba de una sociedad profundamente arcaica; han ido cambiando ese rol a defensores de los modelos neoliberales. Actualmente están directamente relacionadas a la lucha antiterrorista, (algunos artículos periodísticos hablan de un resurgimiento de Sendero Luminoso), al combate de las plantaciones cocaleras y a preservar el orden interno.

Las fuerzas armadas bolivianas tienen un pasado represor: el último golpe de Estado del general Luis García Meza, antes del advenimiento de la democracia, prohibió la actividad de todos los partidos políticos e inició una matanza masiva de opositores tanto en la capital como en los centros mineros. Al reiniciarse la democracia dicho general fue condenado sin derecho a indulto convirtiéndose en un caso inédito en la historia latinoamericana. Con la puesta en marcha del modelo neoliberal, los gobiernos han recurrido normalmente a la represión para acallar las protestas sociales. Con respecto a los últimos sucesos de febrero de 2003, el Tribunal Constitucional estableció en un fallo que los militares involucrados en las muertes civiles deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no en el tribunal militar. La respuesta del Alto Mando Militar ha sido el desacato al fallo del Tribunal Constitucional y por primera vez en 22 años de democracia han hecho público un pronunciamiento de corte eminentemente político. (Urioste: 2004; 161)

Las fuerzas armadas han tenido un papel arbitral y decisivo en los acontecimientos políticos de los últimos años en Ecuador. Su participación en el ámbito nacional ya era muy activa en diversos ámbitos. El ejército ecuatoriano se había vinculado con el sector indígena mediante un trabajo llamado de "apoyo al desarrollo" y los gobiernos militares en ese país no tuvieron la dureza y represión que primó en otros. De allí que era una institución con credibilidad y aceptación por la población ecuatoriana. (Entrevista a Lucio Gutiérrez: 2001) La experiencia de gobierno que llevaría a cabo desde el año 2002 les acarreó una imagen más negativa, ya que las desprestigió. Esa experiencia, que uniría al movimiento indígena y sectores medios y bajos que repudiaban las condiciones de vida con militares que querían hacer una limpieza ética: extraditar banqueros prófugos e incautar sus bienes, detener corrupción en las aduanas, llevar adelante políticas

³ Se puede hablar de un proceso fallido con respecto a la instauración del neoliberalismo en Ecuador. Este modelo, en ese país, se aplicó en forma inconsistente.

adecuadas en petróleo y comercialización, terminar con niveles de corrupción, rechazar el acuerdo de paz con Perú y lograr una distribución más justa de sueldos, terminó en un gran fracaso y efectivamente, en el gobierno de Lucio Gutiérrez verán cuestionada su legitimidad. (Ramírez: 2000; 19)

Por más de dos décadas casi no hubo resistencia a la implementación de las políticas neoliberales- recién al final de la década pasada las poblaciones que han sufrido y sufren esos procesos han comenzado a organizarse y movilizarse para evitar su continuidad.

Así, se han ido formando nuevos sujetos sociales, que reivindican sus derechos de múltiples formas. La profundización de protestas sociales y resistencias heterogéneas cada vez más confrontativas, ha planteado una oportunidad y un nuevo desafío, fundamentalmente porque ha consolidado al sector campesino-indígena como uno de sus principales actores.

Una gran parte del movimiento de los indígenas corresponde al campesinado, por eso una importante proporción del mismo en Latinoamérica ha asociado sus problemas con la lucha por la tierra, aunque la mayoría no ha vuelto a forjar los grandes movimientos que produjeron cambios profundos en la estructura de la tenencia de la tierra y en la estructura del poder rural que se dio entre 1950 y 1970. En esa época la clave era la lucha clasista, en cambio desde el ochenta tiene un componente étnico más marcado. Este es el caso de Ecuador, donde el movimiento indígena se constituyó en un opositor constante de las políticas de ajuste instaladas en el ochenta, con el aporte "de líderes formados en los antiguos partidos de izquierda, en comunidades eclesiales de base y en diversos procesos auto organizativos." (Ramírez Gallegos: 2003; 18) En 1986 surgió la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) compuesta por dos grupos de indígenas: unos originarios de las sierras en las que se habían desarrollado en la década del sesenta las luchas por la reforma agraria con una impronta clasista, y los indígenas de la Amazonia, que llevaban adelante una lucha más étnica influenciados por misiones católicas.

En 1990 el importante levantamiento indio marcaría la formación de un colectivo con características culturales propias, los indígenas comenzaron a visualizarse como ciudadanos y su movimiento se constituyó en el referente de los movimientos sociales de Ecuador. Aparecía además una intelectualidad indígena y una dirigencia autónoma. Como desde el comienzo mantuvieron una permanente negociación con el estado para resolver problemas locales urgentes, se fueron paulatinamente acercando a la escena política formal. Luego esa opción maduró y se concretó en la creación del Movimiento político Pachakutik (para la participación electoral) siguiendo un proceso que va teniendo transformaciones cualitativas en su discurso y en sus formas organizacionales, pasando de la lucha por la tierra a la lucha por la "plurinacionalidad" (educación bilingüe, sistema de salud indígena,

reconstitución de pueblos originarios). De esta manera comenzó a plantear un cuestionamiento a la estructura jurídica del Estado. Ya se visualizaban como sujetos históricos, participando en elecciones. Al darle el nombre de "Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik nuevo país" se integró como multiétnico proponiéndose generar alianzas con grupos progresistas. También las demandas de corte campesino, sin perderse, fueron absorbidas por demandas más globales. El concepto de "plurinacionalidad" es una categoría política compleja, que abarca otros como "multicultural", "pluralista" y "democrático" ya que no se reivindican solamente los derechos de los indios sino de la sociedad en su conjunto y plantea el ejercicio de los derechos de todos, superando las visiones etnicistas y culturalistas. También significa para ellos respeto por la diversidad, derecho a pervivir en la diferencia y rechazo del modelo neoliberal. El estado plurinacional es propuesto como un recurso estratégico-político al que se le van incorporando nuevos actores y procesos y no como un discurso acabado. Implica un proceso político organizativo que se transforma y readecúa. Aunque peca de ambiguo, le ha dado al movimiento indígena una coherencia programática, se lo considera como un proyecto a largo alcance.

Esta propuesta afecta las construcciones simbólicas y el imaginario social construido por el poder hacia lo indígena ya que en Ecuador hay una sociedad racista, autoritaria, intolerante, inequitativa, para la que todo lo indígena significa derrota o fracaso y que se niega a verse en el espejo de su historia, negando sus raíces y siempre ha demostrado indiferencia y desprecio hacia el universo indígena. Ese universo fue sufriendo una transformación cualitativa no solo en el plano discursivo sino en el proceso de politización: en 1997, luego de la destitución de Abdalá Bucaram, logró en parte efectivizar su planteo de "refundar" el país mediante una nueva constitución. La Asamblea Constituyente reconoció la existencia de los "Derechos Colectivos" para los pueblos indígenas⁴ pero no aprobó el Estado plurinacional y esto fue más una derrota que un avance (por eso los indígenas reconvirtieron la significación de su proyecto en nacional, que abarcaba a todos y tenía que ver con una redefinición de todo el Estado⁵) resultando una constitución tradicional que reafirmó contenidos homogeneizadores y represivos, lo que hacía imposible la gobernabilidad (Barrera Guardera: 2000; 47)

Luego de los levantamientos de 1999, a pesar de que lograron imponer una mesa de diálogo con el gobierno para temas indígenas y no indígenas y que aquel prometió adoptar políticas sociales y revisar los programas de ajuste, lo que hizo fue profundizarlos. Esto los llevaría en el 2000 a ejercer una crítica radical al Estado y a la "democracia de élite" a través de un pedido de

⁴ Se incorpora la figura de Derechos Colectivos de los pueblos indígenas, esto trajo otros problemas como son los mecanismos de puesta en práctica y la armonización con las leyes existentes

⁵ La elite política había aceptado esa reforma porque lo que le preocupaba era la gobernabilidad, no la plurinacionalidad

disolución de poderes y la creación de un gobierno de salvación nacional donde los indígenas tendrían directa participación.

En Perú, los movimientos sociales y de resistencia indígenas- campesinos se han mostrado más fragmentarios y heterogéneos. Diez Hurtado afirma que uno de los principales rasgos del espacio rural peruano contemporáneo es la coexistencia de múltiples organizaciones. Además de las comunidades y las organizaciones religiosas de larga data, hay hoy en día una miríada de nuevas organizaciones y formas de asociación ocupadas en las tareas y funciones más diversas. Si bien no hay un movimiento social indígena en Perú que tome la forma del ecuatoriano, existen algunos que atienden a los reclamos indígenas, por ejemplo la COPPIP que es un espacio de encuentro y diálogo entre las organizaciones indígenas peruanas de costa, sierra y amazonía que poseen mandato directo emanado de sus comunidades de base, sean campesinas o nativas. La COPPIP no está integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) sino por netamente comunales e indígenas. El Comité Ejecutivo ha definido que las ONG´S y organizaciones pro-indígenas cumplen una labor de acompañamiento. A iniciativa de sus miembros, la COPPIP constituye mesas de trabajo y concertación y elabora propuestas sobre diversos aspectos que interesan a los pueblos indígenas del Perú bajo los principios de respeto, consulta y participación.

La Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú en 1997 fue un evento de gran trascendencia para el movimiento indígena pues congregó a cientos de delegados de pueblos indígenas de todas las regiones del país: costa, sierra y selva. Las organizaciones nacionales, regionales y locales, en sus distintas variantes o tendencias, confluyeron en este Congreso que inició una nueva etapa. El esfuerzo realizado por la Conferencia Permanente está sentando las bases para una sólida unificación de los pueblos indígenas de costa, sierra y selva.

De todos modos como Diez lo dice y lo prueban las cronologías del OSAL, se han dado intentos de articulación de organizaciones agrarias a nivel nacional que han tomado la forma de "gremios", algunos con la vocación de promover o proponer políticas, pero la mayor parte de las veces para ejercer algún tipo de presión social, defenderse o demandar al estado algún tipo de beneficios o incentivos a sus asociados.⁶ Las formas que han tomado las protestas que casi a diario se han llevado adelante fueron el paro agrario, el bloqueo de carreteras, el vertido de producción en las mismas, las marchas y movilizaciones hacia los principales centros urbanos, y a las sedes de los organismos nacionales.

Parecería que en la historia reciente de Perú, el impacto de Sendero Luminoso sobre las comunidades campesino-indígenas y la lucha

⁶ Por ejemplo: La Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Asociación Nacional de Parceleros, la Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, así como algunos grupos federativos regionales Federación Agraria Departamental de Madre de Dios, la Federación de Campesinos del Cuzco.

antiterrorista por parte del estado hubieran afectado la dinámica de la resistencia. La recuperación de la democracia y de los espacios de acción pública son muy recientes. A principios del siglo XXI, la intensa movilización de todos los sectores sociales (trabajadores, maestros, estudiantes, campesinos) si bien es fragmentada y heterogénea, coincidió con los procesos a nivel regional, aunque no alcanzó a configurar un movimiento social de las mismas características.

En Bolivia, los campesinos son indígenas. Casi no hay agricultor o habitante del campo que no sea de algún pueblo indígena. La reforma agraria de 1952 les dio la tierra a los aymará y a los quechuas considerándolos sólo en su dimensión económica y social de "campesinos".⁷ Los así beneficiados se organizaron en sindicatos y comunidades campesinas. Los pueblos indígenas del oriente: guaraníes, yukis y demás comunidades, considerados solamente por su origen étnico, no tuvieron derecho a la tierra. En las últimas décadas se rompió esta separación entre lo indígena y lo campesino y la mayoría de los campesinos reivindicó su identidad indígena. El neoliberalismo, en su afán de homogeneizar, acabó fortaleciendo la identidad cultural boliviana. (Solón: 2003; 21)

El conflicto por el acceso a la tierra continúa siendo uno de los elementos de confrontación social entre movimientos indígenas y campesinos sin tierra por una parte, y por otra los grandes propietarios de tierras no trabajadas en los llanos. La reforma agraria de 1953 devolvió la tierra a sus legítimos dueños, los indígenas y campesinos del altiplano y los Valles, construyó una estructura de propiedad y de producción de corte dual: minifundio en el occidente andino y latifundio en los llanos orientales ya que la mayoría de las tierras de los llanos orientales fueron otorgadas a los simpatizantes del gobierno de turno. En las tierras bajas, el Chaco y la Amazonía boliviana hay una fuerte tensión por el acceso a la tierra y a los bosques que enfrenta a los grandes propietarios y a los indígenas orientales y amazónicos y a las migraciones de colonizadores collas de la región andina. Los pueblos indígenas han avanzado con el amparo de la Ley de Tierras (1996) en la titulación de vastos territorios indígenas de propiedad colectiva en el departamento de Santa Cruz que es en esta época un centro hegemónico de

⁷ La reforma agraria boliviana de 1953 fue una de las más importantes de América Latina. Surgió como continuación de la revolución que en un primer período estuvo marcada por la hegemonía directa de la clase obrera, dado que fueron los actores más decisivos en la revolución. En un segundo período ésta devino campesina. El MNR necesitaba erradicar al sector latifundista para imponer su proyecto de desarrollo industrial que estaba bloqueado por la existencia de una oligarquía atrasada; los campesinos indígenas por su parte vieron en la revolución la oportunidad histórica para articular sus diversas rebeliones y destruir la hacienda como estructura social, económica y política.

A partir de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en agosto de 1953 el gobierno central entregó una masiva cantidad de títulos de propiedad que legalizaban las expropiaciones que los mismos campesinos realizaban, por eso no consideraban las reparticiones de tierra como regalos del MNR sino como conquistas propias.

A partir de la restauración política los campesinos intentaron defender lo conseguido adecuándose a las circunstancias. (Mires: 1988; 265)

poder económico. También campesinos-indígenas que provienen de las alturas de occidente llegan a esta región y se han asentado en cualquier pedazo de tierra disponible pero que de manera poco clara tiene dueños. (Urioste, 2004; 157)

Las organizaciones cocaleras, han sido uno de los componentes más activos de la lucha social en Bolivia y uno de los sectores que más contribuyeron a revitalizar y fortalecer el movimiento sindical-campesino desde fines de los años '80. Los bloqueos de caminos y la confrontación con las fuerzas policiales y militares erradicadoras, han devenido en poderosas demostraciones de fuerza y capacidad de movilización que desafían el principio de autoridad y soberanía estatal. Pero las rutinas más eficaces de los cocaleros han sido las marchas de grandes grupos poblacionales que han logrado visibilizar al conflicto y obtener un fuerte apoyo social. Han buscado la solidaridad ciudadana apelando a los sentimientos humanitarios de la gente y a los sentimientos de solidaridad político-ideológica por medio de la interpelación discursiva. Así, el término "coca" asociado por los gobiernos al narcotráfico y a la cocaína ha sido resignificado como "hoja milenaria heredada de nuestros padres" y fundamentalmente como símbolo de la "defensa de la dignidad nacional" ante el avasallante poder de los mandatos de la embajada estadounidense. De esta manera ha emergido un movimiento mezcla de izquierda rural y urbana, sindicalismo y etnia, capaz de organizar el discurso anti-neoliberal y antiimperialista e incorporar una visión étnica cultural andina, que interpela a otros sectores empobrecidos y marginados de la sociedad boliviana. (Stefanoni: 2003; 59)

El surgimiento de los liderazgos de Evo Morales en torno al Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Felipe Quispe con el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) fue un efecto directo de la conquista del poder estatal local por parte de los indígenas organizados a partir de la Ley de Participación Popular que se aprobó en 1994 que otorgó pleno reconocimiento jurídico a las autoridades originarias y a las circunscripciones territoriales de sus comunidades, lo cual despertó un sentimiento de pertenencia, autogobierno y apropiación indígena de la institucionalidad pública local. De los 318 municipios que existen hoy en Bolivia, 280 son estrictamente rurales y están gobernados mayoritariamente por alcaldes y concejales de origen indígena-campesino. Además, prácticamente un tercio de los representantes nacionales en el Congreso Nacional son indígenas. (Urioste: 2004; 158)

La emergencia de indígenas, campesinos y cocaleros y la constatación de que sus demandas chocaban con las del Estado, llevó a los sindicatos campesinos a plantearse la organización de una nueva estrategia llamada "Instrumento Político" aprobada por el Primer Congreso Tierra y Territorio reunido en marzo de 1995 y que consistía en la fundación de un movimiento organizado como extensión de las instancias sindicales campesinas que vivían protagonizando grandes movilizaciones en defensa de la tierra, el territorio y contra la erradicación de los cultivos de coca. De esta manera se

insertaba plenamente en una larga tradición de superioridad del sindicato sobre el partido, idea que marcó la lógica organizativa del movimiento popular desde los años '40.

Se abrió así un proceso liderado por Evo Morales que culminó en el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), el cual, al no contar con reconocimiento electoral, usó la personería jurídica del MAS para participar en las elecciones. Así, los "partidos" de este nuevo ciclo campesino indígena han nacido a partir de Congresos sindicales de los movimientos sociales para conseguir proyección política disputándoles los votos a los partidos tradicionales en un contexto en el que hacer política electoral ha devenido un mandato de la asamblea. En las elecciones de junio de 2002 el MAS ganó en 4 de los 9 departamentos, en dos de las tres ciudades más importantes del eje central La Paz- Cochabamba –Santa Cruz y casi termina primero en las elecciones para presidente.

Estos nuevos liderazgos como el de Evo Morales⁸ y Felipe Quispe contribuyeron a desarrollar un proceso desde abajo, en el cual los indios están a la cabeza de manera autónoma y los liderazgos han sido construidos a partir de un largo proceso de ocupación sucesiva de cargos en el sindicato campesino para recién ocupar posiciones en el "Instrumento Político" y eventualmente en el Parlamento. (Stefanoni: 2003; 62)

En los tres países trabajados se han producido momentos culminantes en que los sectores populares han irrumpido con fuerza en el escenario nacional de sus respectivos países en los primeros años del siglo XXI.

Esos momentos se plasmaron en Ecuador cuando se produjo en enero del año 2000 un gran levantamiento indígena, apoyado por las fuerzas armadas, que disolvió los poderes republicanos e instaló un Parlamento Nacional y cuando dos años más tarde (2002) el Movimiento Pachakutik logró inesperadamente acceder al poder junto con sectores de izquierda y parte de los militares.

El primer momento tuvo como detonante la dolarización propuesta por Jamil Mahuad. La gigantescas movilización destituyó los poderes acusados de corrupción en un cuadro de caos generalizado y una inflación galopante. En unión con militares disidentes liderados por Lucio Gutiérrez se formó un "Junta de Gobierno de Salvación Nacional". Luego de este momento cúlmine se llegó a una solución "jurídica": la asunción del vicepresidente Gustavo Novoa con el apoyo del Congreso, las fuerzas armadas y la Cámara de

⁸ Cuando hay que tomar posicionamientos políticos generales o acciones concretas, como bloqueos, Morales "baja" a los congresos y amplios sindicales. El encuentro cara a cara con las bases al igual que con sus votantes resulta clave en la construcción de liderazgo de Evo Morales, su vestimenta vocabulario se diferencian de los "políticos tradicionales" presentándose como uno más entre sus compañeros campesinos pese a ocupar espacios antes reservados a quienes poseían los beneficios de la distinción. El ser un portavoz privilegiado de los campesinos que siempre vuelve a sus bases y que se esfuerza por aprender para responder sus actuales responsabilidades le ha permitido a Morales construir poder a partir de la credibilidad, la confianza, el reconocimiento y la fidelidad de sus pares

Empresarios. La salida semiconstitucional sería considerada por los indígenas como una traición retirándose a sus comunidades rurales.

A la vez que "golpe militar" (produjo un resquebrajamiento en la continuidad democrática) este fenómeno también había sido una "destitución popular" porque a la iniciativa indígena se le habían adherido amplias capas de la población con un profundo malestar y sentimiento de agravio e injusticia. Petroleros, educadores, organizaciones barriales, sectores militantes y algunos partidos se habían alineado tras el Movimiento indígena que hizo de fuerza de choque por otros que no tenían su capacidad movilizadora. De esa manera "lo indio" se había instalado en el centro del conflicto social y se lo había pasado a considerar la fuerza capaz de imprimir coherencia programática.

El segundo momento cumbre para el movimiento indígena en Ecuador fue la sorpresiva victoria electoral de Lucio Gutiérrez, representando una alianza entre ex militares, el Movimiento indígena Pachakutik y sectores de izquierda (ganaron con el 20% de los votos), mostrando la crisis de los partidos tradicionales, la división de la centro izquierda y la dispersión de sufragios. Lo imprevisto del desafío de gobernar encontraba a los aliados con agendas en formación.

Pero ni bien comenzó su gobierno, Gutiérrez se definió por continuar con el uso de la política fiscal como mecanismo de ajuste en una economía dolarizada, poner como ministro de economía a un neoliberal ortodoxo e incluir en su gabinete sólo a dos ministros provenientes de Pachakutik, ubicados con roles secundarios y alejados de los centros de detención, optando por priorizar su círculo familiar, militar y bancario.

Las medidas adoptadas, desde el alza de la gasolina, servicios públicos y la del gas (que fue boicoteada por el Movimiento indígena), la diferente posición frente a la política petrolera⁹ hasta las decisiones en política exterior, totalmente incoherentes entre las propuestas por el ejecutivo y las de la Canciller (perteneciente a Pachakutik) perturbaban la estabilidad de la alianza¹⁰

Como consecuencia de esta situación, y dado el deterioro de la coalición, la actitud del movimiento indígena fue la de comenzar a llevar adelante una combinación inédita: al mismo tiempo que era gobierno, realizaba discursos

⁹ Este paralelismo se mostró claramente cuando el Movimiento Indígena proponía una política petrolera de corte nacionalista intentando vincularse a nivel regional con Petróleos de Venezuela, y la postura del Ejecutivo en atraer a las empresas transnacionales persiguiendo a los participantes de la huelga. Finalmente se disolvió el Consejo Administrativo de Petroecuador y se creó otro en el que el Mi ya no tenía acceso

¹⁰ La incoherencia en política exterior, desde un cambio en la política anti narcóticos a favor del Plan Colombia ofreciéndose el Presidente a mediar ante las FARC, a la presencia de la canciller en la Cumbre de No alineados pronunciándose por una solución pacífica, del conflicto iraquí o la negativa a firmar un acuerdo de excepción de juicios a militares norteamericanos ante la Corte Penal Internacional

de resistencia y contestación, lo que llamaron: "gobernar resistiendo y resistir gobernando".¹¹

El gobierno de Gutiérrez reaccionó amenazando con destituir a los funcionarios que llevaran a cabo esa política destituyendo posteriormente por esa causa a la Ministra de Educación. Al boicotear los diputados de Pachakutik un proyecto incluido en los acuerdos con el FMI, el Presidente les solicitó la renuncia.

Terminaba de esa manera una coalición que sólo había durado dieciséis meses en el poder liberando al movimiento indígena de sus compromisos gubernamentales, pero resquebrajada la solidez de su programa de gobierno debiendo hacer un profundo proceso de autocrítica y un reacomodo de su organización.

En cuanto al gobierno, quedó malparado, con su capacidad de gestión disminuida y teniendo que cumplir con el FMI. Intentó, por otra parte seguir su política clientelar con algunos grupos indígenas, especialmente los amazónicos. Posteriormente, el régimen se ha derechizado, privatizando empresas públicas y los recursos biológicos y energéticos del país. En el plano externo se ha definido en su estrategia de apoyar el Plann Colombia y promover el ALCA. (Larrea Maldonado: 2004; 34)

Los movimientos campesinos indígenas empezaron a plantearse la lucha no solo por la tierra sino por el "territorio" entendido en sus múltiples dimensiones, no solo el suelo sino también los derechos por los recursos naturales que están en el subsuelo y en el "suelo": las aves, la biodiversidad. También por el respeto a sus autoridades originarias, a su autogobierno, a sus usos y costumbres, a su derecho consuetudinario. Conciben al "territorio" no sólo como espacio físico sino como soberanía, como derecho a ser y existir, como identidad cultural, como derecho a ser diferente en un mundo que tiende a la uniformización y a la globalización. (Solòn: 2003; 20)

Relacionadas con esta nueva concepción comenzaron luchas concretas contra la privatización de recursos naturales tales como el agua, el gas y la energía eléctrica entre otras. Bolivia vive desde el año 2000 un período de incremento del conflicto social y emergencia y consolidación de movimientos populares iniciados a partir del intento de privatización del agua. (Seoane: 2003; 77) En 1999 dentro del marco de las políticas privatizadoras que el

¹¹ Desde los cuatro ministerios con que participaba Pachakutik (Agricultura, Relaciones Exteriores, Educación y Turismo y algunas Secretarías) pudo, dentro de grandes limitaciones, consolidar las empresas públicas en ciertos sectores estratégicos (generación hidroeléctrica y telefonía celular) que habían sido privatizadas. También, bajo su influencia se devolvieron los fondos retenidos a los ahorristas nacionales desde el salvataje mediante una firme política de presión sobre los deudores privados. Puso, en su breve paso por el poder, implementar canales de diálogo, participación ciudadana y la búsqueda de consensos entre una diversidad de actores sociales y las agencias gubernamentales. Tal política se plasmó en la activación de un fondo de reactivación productiva para la agricultura y la ganadería y en la campaña masiva de titulación de tierras promovida por Luis Macas, líder histórico del movimiento, desde el Ministerio del área.

Banco Mundial impulsaba para América Latina, el gobierno boliviano decidió conceder a la empresa transnacional Bechtel, Aguas del Tunari, en su nombre local, la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de Cochabamba y alrededores. El contrato fue casi clandestino y con una causa de confidencialidad con el objetivo de que la población boliviana no se enterara. Un grupo de ambientalistas, abogados y economistas se percataron de la existencia de ese contrato y luego de conocerlo comenzaron una lucha para modificarlo, lo cual llevó a la creación de la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida.

La ciudad completa se levantó contra la privatización del agua, un recurso vital por excelencia y decidió a partir de un cabildo abierto mantener tomada Cochabamba hasta que se anulara la ley. Confluyeron en esta lucha sectores rurales y urbanos, indígenas y campesinos, trabajadores fabriles y desocupados, incluso niños de la calle todos pudieron articularse mediante formas organizativas nuevas, éticas, horizontales y muy respetuosas de las diferencias entre ellas. En un principio la idea no era echar a Aguas del Tunari sino discutir el contrato, pero ante la actitud del gobierno de no sentarse a negociar, las exigencias fueron mayores y la protesta se fue ampliando hasta la toma pacífica de la ciudad de Cochabamba a la que el gobierno respondió con represión, pero que terminó con una victoria. La Coordinadora realizó una consulta popular en la que el 98% de los votantes pidió que Aguas del Tunari se retirara. Se intentó amedrentar a la población persiguiendo y deteniendo a las personas más visibles de la Coordinadora pero la población salió entonces con mayor radicalización a las calles derrotando incluso a la policía. (Ceceña: 2002; 97/114) Frente a esta situación, el gobierno no tuvo otra salida que romper el contrato y modificar la ley. La población le ganó al gobierno y esto fue el puntapié inicial para una futura organización.

Las medidas implementadas en febrero del 2003 también provocarían una revuelta generalizada del conjunto de la población de ese país. Todo comenzó cuando el gobierno anunció que se impondría un impuesto a la gasolina o al salario para reducir el déficit fiscal por orden del FMI. El 9 de febrero el gobierno anunció que en vez de un "gasolinazo" que afectaría a todo el conjunto de la población se establecería un impuesto al salario afectando solamente a los asalariados que no eran una mayoría.

El descontento policial también estaba latente. Los policías habían aprendido en el 2000 en ocasión de la guerra del agua que el mejor momento para amotinarse era cuando había conflictos sociales porque es ahí cuando más poder de presión tienen sobre el gobierno, por eso se amotinaron en ese febrero. Con motivo del impuestazo la marcha convocada por todas las organizaciones sociales y la oposición fue numerosa y en lugar de la policía reprimió el ejército. (Solon: 2003; 16)

Quienes se movilizaron fueron personas que carecían de una filiación organizativa y que actuaron en torno de un objetivo sin rendir cuentas a

nadie, sin seguir a nadie y sin tener ningún comportamiento que no emanara de sus criterios y expectativas individuales. (García Linera: 2003; 58)

Se había llegado al año 2003 con grandes conflictos sociales sin solución. Habían transcurrido cuatro años entre la guerra del agua y la guerra del gas. El epicentro del conflicto se trasladó de la ciudad del Valle, Cochabamba a las ciudades del Alto y de La Paz siendo la primera el motor del conflicto desatado en octubre. En ese momento, la cuenta regresiva para el gobierno de Sanchez de Lozada (repudiado por la mayoría del país y apoyado solo por las multinacionales que operan en el país) había comenzado en septiembre cuando los indígenas aimaras iniciaron bloqueos que aislaron a la ciudad de La Paz. Desde entonces las marchas, huelgas y bloqueos arreciaron en todo el oeste del país y acabaron por paralizar a la nación. El gobierno respondió con una sangrienta represión. El detonante de la caída del gobierno se originó cuando el mandatario difundió su idea de vender gas natural a EEUU y México a través de Chile y/o Perú. El gas es el único patrimonio boliviano que no se había entregado al capital internacional.

Sanchez de Lozada se vio obligado a renunciar debido a la presión popular, Carlos Mesa, el vicepresidente ascendió a la primera magistratura. Inmediatamente llamó al país a volver a la paz y a la unidad. Muy condicionado por la posición el gobierno, tiene la difícil tarea de resolver el problema del gas y promover la instalación de una Asamblea Constituyente para el año 2005.

La guerra del gas comprometió a todos los sectores sociales involucrados en los movimientos sociales desde el 2000 y logró unificar al componente social que se hallaba diseminado en sus distintos componentes regionales. La consigna de la defensa del gas resultó no sólo una consigna unificadora sino también una consigna nacional, que sintetizó varios planos de las luchas sociales con la resistencia a la globalización privatizadora, a la recuperación de la soberanía nacional y a la recuperación de los recursos naturales. (Prada Alcoreza: 2003; 37)

Si bien Fujimori ya había privatizado en la década del noventa muchas empresas, tanto de producción como de servicios, y dado que el gobierno de Toledo se presentaría como una continuación de las recetas neoliberales, dentro del cronograma privatizador se encontraba la venta de dos empresas públicas de servicios eléctricos, EGASA Y EGESUR, que abastecían a la región sureña de Arequipa, Moquegua y Tacna.

A comienzos del año 2002 el gobierno había decidido poner en venta las dos empresas eléctricas, a pesar de haber prometido en la campaña electoral no privatizar ninguna de las dos. En realidad Toledo fue aguijoneado por su ministro de economía, quién paradójicamente había actuado en Argentina en el proceso privatizador de Aerolíneas Argentinas. Ya desde marzo del 2002 se habían iniciado en los departamentos del centro y sur paros y movilizaciones en contra de la privatización de las empresas eléctricas regionales. Los alcaldes distritales decidieron radicalizar la protesta y optaron

por desarrollar una huelga de hambre en la catedral de la ciudad. Otros alcaldes y autoridades se fueron sumando a la protesta incluyendo el alcalde provincial de Arequipa. Junto a esto numerosas ciudades de la región: Puno, Juliaca, Cusco realizaban paros generales en contra del proceso de privatizaciones. Acto seguido se interpuso un recurso judicial con el fin de impedir la apertura de los sobres que contenían los resultados de la licitación pública, el cual fue amparado por el Juez, y ordenó paralizar todo el proceso de privatización. El gobierno reaccionó con una posición más dura y de confrontación con el pueblo.

En junio de 2002 el gobierno abrió los sobres de la licitación, la que fue ganada por una empresa transnacional, una firma belga que pagó apenas 164 millones de dólares, un precio que en el mercado energético se considera un precio de ganga.

El pueblo de Arequipa se sintió engañado y salió a las calles, agrupado en un Frente Amplio Cívico. La concentración se realizó en la Plaza de Armas, proclamando la desobediencia civil y la continuación del paro regional, saqueando instituciones públicas y financieras. Se realizaron barricadas resultando heridas y detenidas numerosas personas. Unas 250 asaltaron el aeropuerto de la ciudad y los vuelos fueron suspendidos, enfrentándose con la policía.

En consideración de que la situación no estaba controlada el gobierno declaró el toque de queda y puso a la ciudad bajo el control de la Fuerzas Armadas. A pesar de esto se acrecentó el ruido a cacerolas en la madrugada. Para el lunes 17 la violencia se había incrementado, ese mismo día llegó una comisión de Alto Nivel para iniciar las negociaciones. El 18 el presidente empezó a redactar su carta de disculpas que fue leída por las autoridades: la "Declaración de Arequipa", en ella el gobierno se comprometió a no seguir adelante con la privatización de las empresas y dejar el asunto en manos del poder Judicial. Leída la declaración todo el pueblo se lanzó a la calles a festejar la suspensión de las privatizaciones.

En Enero del 2003 la empresa belga desistió de ejercer su derecho a la propiedad, luego de largos meses de espera, debido a varios recursos de amparo presentados por organizaciones y autoridades locales para detener el proceso de privatización. Los hechos acontecidos dejaron como saldo un balance altamente favorable. Por un lado un movimiento social que logra detener un proceso de privatización enfrentando al estado. Y por el otro la conformación de un Frente de resistencia opuesto a la implementación de una política que distintos sectores visualizaban como altamente perjudicial.

Conclusiones

Aunque la profunda crisis que ha sacudido a estos países, provocada por el impacto social de las políticas neoliberales de ajuste, estabilidad monetaria, apertura al mercado internacional y demás medidas económicas, ha

provocado parecida recesión y una inestabilidad política que ha socavado la gobernabilidad, se puede observar que la dinámica de las protestas y resistencias a la crisis del modelo presentan diferencias en cuanto a la maduración de ciertos movimientos o mayor/menor convergencia de resistencias y luchas.

En Perú, muchos de los conflictos se manifiestan dispersos y múltiples, adoptando formas de resistencias heterogéneas que han logrado limitar en parte las intenciones privatizadoras del gobierno, tal como el caso del levantamiento de Arequipa en que la movilización urbana alcanzó sus objetivos puntualmente y que originó un proceso organizativo incipiente. Parecería visualizarse que el proceso de movilización social está más en sus inicios que en los otros países de la región considerada.

Sin embargo, es en la reivindicación puntual, en el intento de ganarle al gobierno en temas concretos, en unir fuerzas tras reivindicaciones concretas dónde parece estar el camino hacia un verdadero movimiento social.

La existencia en esa sociedad de una población indígena con un pasado tan importante llevaría a pensar que ésta podría haber llegado a una organización superior a las de los otros dos países, sin embargo, la huella dejada por la guerrilla y el terrorismo en los Andes Centrales está todavía muy viva en la piel de las comunidades; así, los movimientos indígenas y campesinos se han mostrado mucho más fragmentados en ese país.

Se muestra diferente el escenario social en Ecuador. La presencia del movimiento indígena y de los movimientos sociales ha convulsionado a la sociedad ecuatoriana, en la medida en que ha develado la realidad profunda de un país diverso en el que grandes grupos poblacionales han sido excluidos durante siglos. Allí, es el movimiento campesino indígena el que inició el movimiento social, el que posteriormente amplía su ámbito a otros sectores sociales, para, después de la mala experiencia gubernamental volver a tender a priorizar lo étnico. El Movimiento indígena en Ecuador se planteó en su origen como un contrapoder, moviéndose por fuera de la institucionalidad y la constitucionalidad, y eso fue lo que le había otorgado preeminencia.

La "estrategia de trincheras", práctica de los indígenas durante siglos, llevó a Pachakutik a tomar la decisión de acceder a los poderes locales y desde allí ir construyendo su base programática y política. Su inesperada y adelantada llegada al poder le planteó tener que llevarla la práctica a nivel nacional, planteando reformas "posibles" desde cada espacio de gobierno. El fracaso de ese intento suscita la cuestión siempre presente del paso entre presentarse como contrapoder y luego ejercer el poder. En este caso la carencia de experiencia en organizaciones previas y de acceso a los medios produjo rupturas con sus aliados, pero siempre está implícito el debate respecto de si lo conveniente sería construir el poder desde abajo o tomar/llegar al poder.

Por su parte, en Bolivia existe un intento de articular a una multitud de sujetos, organizaciones y movimientos sociales que resultan de las luchas hegemónicas y articularias en curso. Las intensas movilizaciones y el aumento de la conflictividad en ese país parecen estar en parte comprendidas por el MAS, cuyo desempeño electoral ha sido muy positivo, por el movimiento cocalero boliviano y la lucha cochabambina por el agua.

Frente a las visiones actuales acerca de cómo cambiar el mundo, el MAS-IPSP plantea sin fisuras la necesidad de "transformar el poder conquistado" por la organizaciones sociales en "poder estatal" rescatando un contexto del nuevo ciclo de luchas y transformación de la estructura de oportunidades políticas en beneficio de la acción colectiva de los sectores subalternos. El MAS ha resignificado la lucha nacional como la lucha por la tierra y el territorio, y ha puesto en un lugar destacado la defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRERA GUARDERA, Augusto, 2000: "Ecuador, o cuando la crisis se hace cotidiana" en Revista OSAL, junio.

BARRERA, Augusto; 2001: "Nada sólo para los indios" en Revista OSAL, junio

BARTHELEMY, Françoise; 2003: "Asalto de las transnacionales del petróleo en Ecuador" en Le Monde diplomatique. Enero.

BONILLA, Angel y Ana María LARREA; 2003: "La ficción democrática: paradojas en las trincheras del poder" en Revista OSAL, enero a abril.

CECEÑA, Ana Esther, 2002: "La guerra del agua en Cochabamba" en Revista Chiapas N° 14. Ediciones Era. México

CENTRO ANDINO DE ACCIÓN POPULAR, 2000: "Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar" en Revista OSAL, junio.

CIRIZA, Alejandra, 2000: "21 enero del 2000 ¿Golpe de Estado o revuelta india en Ecuador" en Revista OSAL, junio.

DAVALOS, Pablo; 2000: "Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano" en Revista OSAL, junio

DAVALOS, Pablo; 2003: "Plurinacionalidad y poder político en el Movimiento indígena ecuatoriano" en Revista OSAL, enero.

Diario Clarín, 22 de octubre del 2003.

Diario Clarín, 21 de octubre del 2003.

Diario Página 12, 18 de octubre de 2003. ps 2/4.

DIEZ HURTADO, Alejandro. Organizaciones e integración en el campo peruano después de las políticas neoliberales . en ¿Una Nueva ruralidad en América Latina? Colección Grupos de Trabajo CLACSO. Buenos Aires 2001

DI TELLA, Torcuato; 1993: Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX". F:C:E: Buenos Aires.

Entrevista a Lucio Gutiérrez; 2000: "Por la segunda independencia" en Cuadernos para la emancipación N° 22. Quito.

ESCOBAR DE PAVÓN, Silvia, 2003: "Ajuste y liberalización: las causas del conflicto social" en Revista OSAL, septiembre a diciembre.

ESPINOZA, Claudia y Gonzalo GOZALVEZ; 2003: "Bolivia, arrinconada en la azotea de su historia" en Revista OSAL, enero a abril.

GANDOLFO Pablo,; 2004 "Frágil equilibrio en el Altiplano" en Revista América XXI. Año I, N° 4. Caracas.

GARCÍA LINERA, Alvaro; 2003: "Crisis estatal y muchedumbre" en Revista OSAL, enero a abril.

GUERRA CABRERA, Angel: 2003. "Arde Bolivia" en La Jornada. México

LOPEZ MONJA, Carina, 2004: "Obstáculos para llegar a 2007" en Revista América XXI. Año I, N° 4. Caracas

LYTON MUÑOZ, Carlos Arequipa: de la privatización a la recuperación de la dignidad. 2002 OSAL.

MAMANI RAMIREZ, Pablo, 2003: "El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymará de El Alto y la caída del gobierno de Sánchez de Lozada" en Revista OSAL, septiembre a diciembre

MIRES, Fernando, 1988: La rebelión permanente. Siglo XXI Editores. México.

PEREYRA, Daniel Del Moncada a Chiapas. Historia de la Lucha Armada en América Latina. Edit. Canguro.

PLA, Alberto. Velasco Alvarado El Nuevo Nacionalismo en Perú. En Historia de América en el Siglo XX. Centro Editor de América Latina 1971/1985.

PRADA ALCOREZA, Raúl, 2003: "Perfiles del Movimiento Social Contemporáneo. El conflicto social y político en Bolivia" en Revista OSAL, septiembre a diciembre.

QUIJANO, Aníbal. El Fujimorismo del Gobierno de Toledo. OSAL. Junio 2002

RAMIREZ GALLEGOS, Franklin, 2000: "El 21 de enero del 2000" en Revista OSAL, junio.

SEOANE, José y Emilio TADDEI, 2003: "Levantamiento popular y luchas sociales en América Latina: del octubre boliviano a las protestas contra el ALCA" en Revista OSAL, septiembre a diciembre.

SEOANE, José y Emilio TADDEI, 200: "Movimientos Sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina, en Revista OSAL, enero.

SOLÓN, Pablo, 2004: "El movimiento contra el ALCA en Bolivia la región andina" en Revista OSAL, enero a abril.

SOLÓN, Pablo; 2003: "Radiografía de un febrero" en Revista OSAL, enero a abril.

STEFANONI, Pablo, 2003: "MAS-IPSP: la emergencia del nacionalismo plebeyo" en Revista OSAL, septiembre a diciembre

URIOSTE, Miguel, 2004: "Bolivia: de la recuperación democrática de 1982 a la agonía de los partidos y el nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas" en Revista OSAL, enero a abril.

VILLEGAS QUIROGA, Carlos, 2003: "Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos" en Revista OSAL, septiembre a diciembre.

CRONOLOGÍAS OSAL, años 2000-2001-2002-2003-2004.

Páginas de Internet: DIARIOS PERUANOS www.larepublica.com.pe
www.correoperu.com.pe

www.fujimoriextraditable.com.pe

WWW.COPPIP.RCP.NET.PE